

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Guadalajara, Diciembre 3 de 1874.
 Vistas las anteriores diligencias practicadas en el juzgado de Distrito de Colima contra los Sres. Keco vander Linden y C^o, sobre pago de ciento veinticinco pesos, importe de veinticinco multas en que incurrieron por veinticinco faltas de especificacion de la calidad de los efectos contenidos en las facturas consulares, correspondientes á la póliza única del registro núm. 22 de la banca hamburguesa «Courrier» fundada en Manzanillo el 1^o de Diciembre del año próximo pasado, y visto el auto de 16 del mes próximo pasado que declara no haber méritos para continuar el juicio respectivo, por haberse conformado los interesados en pagar las enunciadas multas; estando todo arreglado á derecho, con fundamento del art. 41 de la ley de 28 de Diciembre de 1848, se declara: que el C. Lic. Miguel Gonzalez Castro, juez que conoció y resolvió este negocio, no incurrió en responsabilidad.

Comuníquesele: dése cuenta con este expediente á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, y remítanse las copias respectivas al «Semanario Judicial.»—*Juan Robles Martinez.*—*Tomás Bravo*, secretario.

Es copia. Guadalajara, Diciembre 4 de 1874.—*Tomás Bravo*, secretario.

Pedimento del O. Procurador general de la Nacion.

El Procurador general interino dice: que tratándose de un juicio de un valor menor de quinientos pesos, y habiéndose hecho ya la revision del proceso de primera instancia por quien correspondia; que lo es el tribunal de Circuito, segun el arancel de 4 de Octubre de 45, la Corte no tiene jurisdiccion para revisar de nuevo dicho proce-

dimiento y debe limitarse, como lo pide el que suscribe, á devolver las actuaciones al tribunal de su procedencia, archivándose el Toca.

México, Enero 8 de 1875.—*Lorano.*

Auto de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 21 de 1875.

Como pide el ciudadano Procurador general.—*Auza.*—*Garza.*—*Velazquez.*—*Zavala.*—*García.*—*Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero 11 de 1875.—*Alejo G. Eguiarte.*

DILIGENCIAS

Practicadas en el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, sobre declinatoria de jurisdiccion interpuesta por los Sres. Pereda, Martinez y C^o, en el juicio que por infraccion de la ley de papel sellado, sigue contra ellos el Administrador de esa renta en dicho Estado.

Sentencia del O. Juez de Distrito.

San Luis Potosí, Abril 29 de 1874.

Vistos:—El C. P. F. Valdés, administrador principal de la renta del papel sellado en este Estado, denunció ante este juzgado por oficio fecha 31 de Enero último, el hecho de que la tercería de crédito preferente, interpuesta por los Sres. Pereda, Martinez y C^o en los autos ejecutivos que sigue D. Eugenio Pigeon contra D. Nereo Lescosse ante el juzgado 1^o de letras de la capital, se funda: 1^o en una simple carta de avío y no en un contrato en forma como está prevenido por las Ordenanzas de Minería, y en el art. 1^o del decreto de 4 de

Agosto de 1870 que determina el papel sellado que debe usarse en el caso; y 2º en la cuenta reclamada extendida en cinco sellos de los que uno es del sello 1º y los otros cuatro del 4º de facturas, cuentas y recibos, debiendo ser estos últimos sellos, segundos, como lo dispone la fracción 2ª del art. 34 de la ley de 14 de Febrero de 1856. Expresa en su mismo oficio el mencionado administrador, que esos documentos no pueden tener fé en juicio, conforme al art. 53 de la ley últimamente citada, y deben sufrir la pena que señala el art. 51 de esta misma ley, pidiendo en conclusion á este juzgado que hiciese venir los relacionados autos y procediese á dar cumplimiento á los arts. 61 y 55 á 58 de la repetida ley.

Este juzgado, después de oír al ciudadano Promotor fiscal, proveyó mandando pedir al juez de los autos testimonio de las constancias que señalare el ciudadano administrador de la renta de papel sellado. Venidas estas se citó para la celebración del juicio correspondiente, en el que el repetido administrador pide se haga efectiva la multa en que han incurrido los Sres. Pereda, Martínez y Cª, por haber extendido la cuenta que reclaman á D. Nerco Lescosse, en cuatro sellos cuartos, debiendo ser segundos, conforme al art. 34 de la ley de 14 de Febrero de 1856.

El Lic. Manuel Ambrís Moctezuma, apoderado de los Sres. Pereda, Martínez y Cª sin contestar la demanda, declina la jurisdicción de este juzgado para conocer en el presente asunto, dando las razones siguientes: 1º Que el juicio en tercería está radicado en el juzgado 1º de letras de la capital, por haber contestado ya la demanda el ejecutante y promovido cuestión incidental sobre si los documentos de que aquí se trata no están en el papel del sello que corresponde; que por tal motivo, á causa de la *litis pendentia* no es competente este juzgado para conocer del presente asunto, además de que primero conoció el juez del órden comun, ó sea que ha prevenido en el

conocimiento del asunto; 2º Que el art. 55 de la ley de 14 de Febrero de 1856, impone á cualquiera autoridad la facultad y obligación de reclamar la infracción de esa ley y de hacer efectivas oportunamente las penas respectivas en los casos que les sean sometidos; por lo que es al juez 1º de letras á quien toca hacer efectiva la pena, si declarar que ha incurrido en ella la cuenta presentada por los Sres. Pereda, Martínez y Cª, y por último, porque ya se está juzgando este mismo asunto ante el juez 1º de letras, según se expresa el apoderado á fojas 45 vta.

El ciudadano Promotor fiscal, atendiendo al interés que la Hacienda pública tiene en este asunto, el cual se demuestra por las constancias de estos autos, dice que este juzgado es competente para conocer del asunto, y por tanto, pide que declarándose así, se haga contestar la demanda á la parte de los Sres. Pereda, Martínez y Cª.

Considerando: 1º Que á los tribunales federales corresponde el conocimiento de aquellos asuntos en que se trata de la aplicación y cumplimiento de las leyes federales (art. 97 de la Constitución y leyes de 22 de Mayo de 1834, 16 de Febrero de 1826 y real cédula de 22 de Marzo de 1789.)

Considerando: 2º Que la demanda que hace el fisco á los Sres. Pereda, Martínez y Cª, es sobre el cumplimiento de la ley federal de 14 de Febrero de 1856 sobre papel sellado [art. 44 de dicha ley].

Considerando: 3º Que el exámen atento que se haga del art. 55 de la ley últimamente citada, resulta que cualquiera autoridad puede imponer la pena por infracción de esa misma ley; pero no declarar en juicio contencioso si ha ó no lugar á imponerse; pues para este efecto están los jueces respectivos de Hacienda de que habla el art. 60, pár. 1º de la misma ley, cuyos jueces no son otros que los federales.

Considerando: 4º Que á mayor abundamiento, el juez primero de los autos de la

tercería de crédito preferente interpuesta por los Sres. Pereda, Martínez y C^a, no ha promovido competencia en el presente asunto, como lo demuestran concluyentemente las constancias de este expediente, segun las que el juez 1^o en vez de intentar competencia, ha acatado todas las providencias de este juzgado que se le han comunicado con pleno conocimiento de que aquí se comienza el juicio por el incidente de infracción de la ley del papel sellado.

Considerando: 5^o Que aunque la parte de los demandados ha manifestado que ya se juzga el caso de la infracción de la ley del papel sellado ante el ciudadano juez 1^o, no se ha cuidado de comprobarlo, y antes bien aparece que por este funcionario no se ha sentado providencia alguna sobre el particular.

Considerando: 6^o Que si hubiese de admitirse que había lugar á la prevención en el conocimiento de este asunto, es este juzgado quien ha prevenido, por ser él antes que el del fuero común quien ha sentado providencia en el caso.

Considerando: 7^o Que la *litis pendencia* que se objeta á la jurisdicción de este juzgado, no es de tomarse en cuenta, porque de uno á otro modo, con arreglo al art. 53, ha de quedar suspenso el juicio principal sin que sea de atenderse que las otras partes en aquella tercería se perjudicarían, porque consta que tienen conocimiento del asunto en cuestión, y una de ellas, la que representa el C. Lic. Tomás del Hoyo, ha expresado que no es parte en este mismo asunto.

Por lo expuesto debía declarar y declarar: Primero: Que este juzgado es competente para conocer de la demanda que el ciudadano administrador principal de la renta del papel sellado ha promovido contra los Sres. Pereda, Martínez y C^a por infracción de la ley del ramo. Segundo: Que conteste la demanda el apoderado de dichos señores en la junta que se convocará para

el día 2 de Mayo próximo á las once de la mañana, bajo los apercibimientos legales.

Hágase saber. Lo decretó y firmó el ciudadano juez de Distrito del Estado.—Doy fé.—*Conrado Diaz-Soto*.—*Donaciano Monroy*, secretario.

Pedimento del C. Promotor fiscal del Tribunal de Circuito.

C. Magistrado de Circuito:

El Promotor fiscal dice: que el administrador principal de la renta del papel sellado de San Luis Potosí, libró oficio al ciudadano juez de Distrito del mismo Estado, haciéndole saber la infracción cometida por los Sres. Pereda, Martínez y C^a en contra de la ley de 14 de Febrero de 1856, que reglamenta el uso del papel sellado.

Como esta infracción haya tenido lugar en una tercería de preferencia, que los Sres. Pereda, Martínez y C^a han interpuesto en un juicio ejecutivo seguido ante el juez ordinario, hay la dificultad de resolver si de este incidente debe conocer el ciudadano juez de Distrito ó el relacionado juez de letras de San Luis Potosí. No cabe la menor duda de que conforme al art. 55 de la ley de 14 de Febrero de 1856, toca al ciudadano juez de letras el conocimiento de este incidente; y esto es de constante práctica. Si el Promotor fiscal, salvo en las informaciones de insolvencia, no puede litigar por el fisco sino en sus propios tribunales; no sucede lo mismo con los administradores de la renta del papel sellado, quienes donde no hay jueces de Distrito, y aun habiéndolos, siempre acuden á los jueces ordinarios reclamando la infracción de la ley del ramo, porque esta comete la obligación de castigar por su falta de observancia, á toda autoridad. También atribuye á toda autoridad el ejercicio de la facultad económico-coactiva para la exacción de las multas que deban imponerse á los que quebrantan la ley. En esto no hay ni puede haber duda.

Mas no es una cuestion de preferencia la que va á decidirse ni una competencia, sino que conforme á la regla *tantum devolutum, quantum appellatum*: el tribunal tiene únicamente que resolver si es ó no de contestarse la demanda sobre dicha infraccion ante el ciudadano juez de Distrito.

La competencia del ciudadano juez de letras no excluye la del ciudadano juez de Distrito para conocer de infracciones á las leyes federales; y pues el primero no reclama su jurisdiccion por medio del recurso de competencia, parece expedita la del segundo. Con todo, aquí ocurre como en todos los negocios en que no se ha procedido con diligencia y conocimientos debidos, una grave dificultad: ¿En vez de cumplir con la ley el ciudadano juez de letras, debe sacar testimonio de lo acontecido y remitirlo al juzgado de Distrito?

El Ministerio público no autorizaria con su opinion semejante práctica, que seria nueva en los tribunales, pues con ella se dejaria á estos exclusivamente el cuidado de imponer penas por ciertos delitos ó faltas, cuya averiguacion y castigo toca por leyes federales, á los jueces comunes, como sucede en lo relativo al papel sellado.

Se comprende fácilmente que si un juez coman falta á la obligacion de imponer una multa por el no uso del papel sellado correspondiente, pueda el juez de Distrito encargarse de multarlo á su vez: lo que implica nada menos que la obligacion del primero en hacer uso de su jurisdiccion para hacer observar la ley federal.

Tambien se comprende por el estudio y reflexion sobre nuestra Constitucion y nuestras leyes, que muchas autoridades de los Estados tienen atribuciones federales. Visan los gobernadores los cortes de caja de los gefes de Hacienda. Exijen y entregan la contribucion federal los recaudadores de los Estados. Los jueces ordinarios imponen multas por infraccion de la ley del papel sellado. Y cuando estos funcionarios dejan de cumplir con su deber, así como los em-

pleados de los Estados, vienen á responder de su conducta ante la autoridad judicial de la Federacion, por haber á su vez infringido las leyes.

Así pues, no puede autorizarse la indiferencia de las autoridades de los Estados en lo tocante al empeño que han contraído y protesta que han hecho de cumplir y hacer cumplir las leyes federales, ni se puede admitir que se desprendan de su jurisdiccion para *que solo los funcionarios federales hagan cumplir esas leyes*.

Si, pues, á los funcionarios y empleados, ante quienes se presente un documento que no esté extendido en el papel del sello correspondiente, toca imponer la multa respectiva, á ellos, y á ellos principalmente, conforme al texto de la ley, toca el conocimiento del incidente relativo.

Autorizar por lo mismo la práctica de que estos formen expediente para remitirlo al juez de Hacienda, es reconocer que no tienen obligacion de cumplir la ley. Estas reflexiones ponen en claro la cuestion propuesta, á juicio del Ministerio público, que cree que toca al ciudadano juez de Distrito velar porque el ciudadano juez de primera instancia de San Luis Potosí cumpla con imponer la multa en que hayan incurrido los Sres. Pareda, Martinez y C^o, y que el modo de llegar á este resultado, conforme á los arts. 55 y 60 de la ley de 14 de Febrero de 1856, es formar averiguacion sobre no haber sido impuesta la multa por el juez de letras, que por esa omision incurrió en la pena del duplo.

En cuanto al ciudadano administrador, debió de haber reclamado al juez de los autos; y cuando á su juicio éste hubiese infringido la ley, debió dar parte al juzgado de Distrito para que impusiese á aquel las penas de reintegro y duplo.

Como declarar competente al ciudadano juez de Distrito aprobando su auto, de que se ha apelado, seria autorizar una práctica contraria á la hasta aquí observada, y hacer que se desentendiera el ciudadano juez

de letas de sus obligaciones para con la Federacion, es claro que no debe de confirmarse el auto apelado.

Para concluir, observará el Ministerio público, que aunque con carácter de ordinario, el juez de letras de San Luis Potosí, no ejerce mas que jurisdiccion federal cuando impone una multa por infraccion de la ley del papel sellado. Esta jurisdiccion que la ley le da, no puede arrebatársela el ciudadano juez de Distrito, por solo el hecho de ejercer plenamente en todos casos y no en determinados, igual jurisdiccion. Qué ejerce jurisdiccion federal y necesaria el juez de primera instancia, se demuestra por el art. 55 citado, que le impone pena si no hace cumplir la ley.

En vista de lo expuesto, el Promotor fiscal pide: 1º se revoque el auto apelado; 2º se le diga al ciudadano juez de Distrito, que en su caso, no cumpliendo con la ley el ciudadano juez de letras que conoco de la tercera interpuesta por Pereda, Martinez y Cº, proceda á formar la correspondiente averiguacion.

Querétaro, Junio 29 de 1874.— *Luis Castañeda.*

Ha copia que certifica: Querétaro, Agosto 7 de 1874.— *Ramon Reynoso*, secretario.

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Querétaro, Julio 8 de 1874.

Vistos: Los presentes autos formados sobre la apelacion que de la sentencia en que se declaró competente el ciudadano juez de Distrito de San Luis Potosí, interpuso la parte de Pereda, Martinez y Cº representada por el Lic. D. Manuel Ambris Moctezuma, en el incidente sobre la aplicacion de artículos penales de la ley de 14 de Febrero de 1856, por la presentacion de documentos extendidos no en papel del sello correspondiente hecha ante el juzgado ordinario de aquella ciudad: visto el escrito de expresion de agravios, el pedimento fis-

cal, la citacion para sentencia con cuanto verse y tenerse presente convino, y

Considerando: Que si bien es cierto que las leyes federales deben ser aplicadas por las autoridades de la Federacion segun la fraccion 1ª del art. 97 de la Constitucion general de la República, tambien lo es que las leyes generales pueden y deben ser aplicadas por todos los jueces, y mas cuando solo se trata de ley general que en nada afecta al sistema federal, ni es ley que emane de la Constitucion política del país; por cuya circunstancia es inaplicable la fraccion citada del art. 97.

Considerando: que si bien el fisco federal tiene intereses en la aplicacion de las penas que impone la ley de papel sellado, por ser productos que corresponden al gobierno general; la comision de perseguir las infracciones de la ley y la de imponer las multas respectivas, la misma ley la dejó á los jueces ante quienes se presentan los documentos ó se cometen las infracciones, haciéndolos hasta responsables por sus omisiones, como es de verse en los arts. 53, 55 y otros, por cuyos fundamentos á ellos compete la aplicacion de la ley ya citada de 14 de Febrero.

Considerando: que aunque las leyes que crearon á los jueces federales, art. 143 de la Constitucion de 24 y ley de 14 de Febrero de 26, establecieron por principio que conociesen en los negocios en que tuviese interes el erario federal; tambien es inconcuso que la ley de papel sellado, fuera de ser posterior á las de la creacion de aquellos funcionarios, es especial, y por las disposiciones especiales en un ramo, se entienden derogadas las disposiciones generales dadas en distinto sentido segun la regla 158 del derecho que dice: *Mañlatum speciale derogat generali.*

Considerando: que con solo el hecho de que éste tribunal declarara no pertenecer á la jurisdiccion del juez ordinario, la aplicacion de la ley de 14 de Febrero, seria es-

tablecer que dichos funcionarios no fuesen responsables cuando dejasen de aplicar las penas que se fulminan en aquella disposicion, lo que no seria otra cosa que derogar la ley; cuya disposicion daria lugar, no solo á la responsabilidad del magistrado que lo decretase, sino á la nulidad y hasta al ridículo, por no considerarse atribucion del poder judicial la derogacion de una ley de cualquier género que fuese.

Considerando: Que la práctica universalmente establecida no interrumpida ni contrariada jamás, ha enseñado á los jueces á obrar de absoluta conformidad con lo prevenido en la ley de 14 de Febrero, es decir, á tenerse por competentes para la aplicacion de las penas que establece para los que presentan los documentos no extendidos en papel del sello correspondiente, y á ser responsables si no obrasen en los términos antes explicados. Y haciendo el tribunal suyos los fundamentos y razones expuestas en el escrito de expresion de agravios y en el pedimento fiscal, el ciudadano magistrado segundo suplente de este tribunal de Circuito dijo: Que debia de revocar y revoca la sentencia del inferior de 29 de Abril del corriente año, declarando que los Sres. Pereda, Martinez y C^{as} están obligados á contestar sobre la infraccion de la ley de papel sellado, ante el juez á quien fué presentado el documento. Hágase saber á quien corresponda y cúmplase con lo prevenido en el art. 34 de la ley de 14 de Febrero de 1826. Así lo decretó, mandó y firmó el C. Lic. Antonio Hernandez, magistrado segundo de este tribunal de Circuito por ante mí.—Doy fé.—Antonio Hernandez.—Ramon Reynoso.

Es copia que certifico. Querétaro, Agosto 7 de 1874.—Ramon Reynoso.

Pedimento del C. fiscal de la Suprema Corte de Justicia.

El Fiscal interino dice: que en el juzgado de Distrito de San Luis Potosí en 31

del presente año, dieron principio las presentes diligencias sobre declinatoria de jurisdiccion interpuesta por los Sres. Pereda, Martinez y C^{as}, en el juicio que contra ellos sigue el administrador de la renta de papel sellado de San Luis Potosí, por infraccion de la ley del mismo, y en las que el mencionado juez de Distrito de dicho Estado, por auto de 29 de Abril, se declaró competente para conocer de dicho juicio; pero apelado este auto por los demandados, y sustanciado el recurso conforme á la ley, de conformidad con el pedimento fiscal, fué revocado por el tribunal de Circuito de Querétaro en 8 de Julio, declarando que los Sres. Pereda, Martinez y C^{as} están obligados á contestar sobre la infraccion de la ley de papel sellado.

El que suscribe, aunque es de opinion que en esta clase de negocios, el juez competente es el de Distrito y el del orden comun solo tiene facultad para obrar como autoridad administrativa, á fin de procurar que la hacienda pública quede asegurada, opinion que está apoyada en una sentencia ejecutoriada pronunciada por esta primera sala, en 23 de Octubre de 1873, que decidió la competencia suscitada por el juzgado 2º de Distrito de esta capital al 3º de lo civil de la misma, en un negocio semejante al presente; aunque el que suscribe, vuelve á decir, tiene tal opinion, sin embargo, como los interesados se conformaron con la sentencia pronunciada por el Magistrado de Circuito, esta causó ejecutoria; y por lo mismo, concluye pidiendo que se dé por revisada la sentencia expresada.

México, Diciembre 8 de 1874.—Velasquez.

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 26 de 1875.

Por-revisada, y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívense á su vez el Toca.—M. Auza.—Juan J. de la Garza—S. Guzman.

man.—M. Zavala.—José García Ramírez.
—Luis María Aguilar, secretario.
Son copias. México, Mayo 23 de 1875.
—Alejo Gómez Eguarte.

CAUSA

Instruida en el Juzgado de Distrito de Jalisco contra Dn. Rafael Escoto, Visitador de Correos de Guadalajara, por faltas cometidas en el desempeño de su comisión.

Pedimento del C. promotor fiscal del Juzgado de Distrito.

Ciudadano Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: Con apoyo de los documentos remitidos á ese juzgado por la Administracion General de Correos y que obran en la presente causa hasta la foja 38, formuló el suscrito los correspondientes cargos de responsabilidad en contra del Ex-visitador de la Principal de Correos en esta capital, C. Rafael Escoto, solicitando que se formara la averiguacion relativa y reservándose pedir lo que fuera de justicia, segun el resultado de aquella, cuando se encontrara la causa en plenario. Este periodo del proceso comenzó ya desde la confesion con cargos tomada al C. Escoto, y despues de presentada la defensa que el Lic. Zelayeta hizo en favor de aquel, toca al que firma emitir su parecer.

Difícilmente podrá el juzgado formarse juicio del monto de las responsabilidades contraídas por el C. Escoto, en la visita que practicó á la Principal de Correos de esta ciudad, con los datos imperfectos que arroja el proceso, y menos apoyar en ellos una sentencia condenatoria. Se nota desde luego la falta del expediente de visita, como lo ha dicho el defensor, siendo nec-

sario tenerlo á la vista, original ó en testimonio autorizado, antes de resolver: no se comprende por las diligencias practicadas cuál es la importancia de las raspaduras hechas en el libro de Concentracion, calificar si su ejecucion importa solo una falta ó un verdadero delito; no se sabe si positivamente el procesado no cumplió con la mision de establecer la contabilidad acordada por la Administracion General, y puso en planta un método suyo particular, pues aunque se le formuló ese cargo por dicha Administracion, con fundamento tan solo de lo que dijo el mismo Escoto al dar cuenta de su visita, éste lo niega absolutamente en su inquisitiva, y el proceso no suministra dato alguno sobre el particular, haciéndose necesario interrogar sobre ello al actual Administrador de Correos en esta capital; y en fin, se encuentra poca consistencia en el proceso, para sostener diferentes otros cargos. El juzgado dictará las providencias que le parezcan oportunas para tener á la vista el expediente de visita; pedirá informe sobre la contabilidad establecida por el procesado, y practicará diligencias si le parece necesario sobre los demás puntos conducentes á la perfeccion de la causa, ó bien calificará en justicia los cargos hechos segun los datos insuficientes del proceso que le ha sido posible formar. Por su parte, el Promotor, con la escasa luz de esos datos, pasa á examinar dichos cargos.

1º El de raspaduras en los libros no está justificado en contra del C. Escoto, ni hay datos para calificar su importancia. La aseveracion del C. Montenegro fundada en que vió ejecutar esas raspaduras al C. Refugio Gutierrez y de haber declarado éste que las ejecutó por autorizacion del procesado, negándolo Escoto, son los únicos datos sobre el particular.

2º El rezago de cuatro bultos con 204 paquetes de impresos pertenecientes á 1871, no dirigidos á su destino, tampoco suministra prueba bastante para sostener el cargo contra Escoto, tanto por las explicaciones